

GACETA DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE PUERTO-RICO.

DEL MARTES 10 DE ENERO DE 1837.

ARTICULO DE OFICIO.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real orden.

Sin embargo de que ha de mediar un corto tiempo hasta que reunidas las Cortes se determine lo conveniente acerca de la organizacion del Consejo de Estado, del que dependió la cancillería que últimamente estaba aneja á la seccion de Gracia y Justicia del Consejo Real, á fin de evitar los perjuicios que en el ínterin podria ocasionar á los particulares, y aun al servicio público, la paralización de sus negocios, y que estos sigan sin interrupcion su curso con el menor gravámen posible del Erario; S. M. la Reina Gobernadora se ha servido mandar:

1º Que hasta que de acuerdo con las Cortes se determina lo conveniente, se expidan por el ministerio de mi cargo los títulos, Reales cédulas y despachos que libraba la mencionada seccion del Consejo Real, haciendo en los modelos respectivos las alteraciones oportunas.

2º Que el Secretario del Despacho del mismo ramo refrende todos estos documentos poniendo su firma en seguida de la de S. M., precedida la siguiente fórmula: *El Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.*

3º Que siempre que deban ir autorizados con el sello Real, ponga este el respectivo teniente de canciller de Castilla é Indias sin otra retribucion que los derechos de arancel.

4º Que para dotar los empleados destinados á escribir dichos títulos, Reales cédulas y despachos, y sacar las copias de ellos que deben depositarse en diferentes oficinas, se exija de los particulares á cuyo favor se libren los cuatro reales vellon por cada pliego del original y copias, en los mismos términos que con el propio objeto se hacia en la secretaría de dicha seccion.

Lo que de Real orden comunico á V. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1836.—Landeró.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Real orden.

De orden de S. M. la Reina Gobernadora acompaño á V. SS. un ejemplar de su Real decreto de 28 de Setiembre último, relativo al establecimiento de tantas intendencias de la Hacienda pública, cuantas son las provincias de la monarquía, segun la division del territorio español hecha por otro Real decreto de 30 de Noviembre de 1833, hasta que las Cortes determinen lo conveniente. La introduccion á aquel decreto es un breve resumen de las razones de economía y de conveniencia pública que lo han motivado; y ellas han parecido tan fuertes al Gobierno de S. M., que le han decidido á adoptar este nuevo sistema ventajoso, bajo todos aspectos, aunque pueda parecer á primera vista gravoso al erario por el aumento de las manos auxiliares.

Era, á la verdad, una anomalía el que una provincia determinada perteneciese en el orden civil á una autoridad, y en el orden económico á otra distinta y de diferente provincia. Los intereses de los pueblos estan por la naturaleza misma tan enlazados, que es moralmente imposible que puedan atenderse bien si se hallan confiados á muchas manos, y no todas ani-

madas de un mismo deseo, ni tan instruidas como pueden y deben estarlo las que no juzgan ni obran sino por la observacion y la experiencia de lo que cada dia estan tocando, y aun por las inspiraciones de los pueblos, que rara vez se equivocan en sus asuntos propios, ni en los medios de satisfacer pronta y eficazmente sus necesidades.

La division económica de las provincias hasta aqui, ha producido y no ha podido menos de producir el retardo en los negocios de mas grave importancia, la arbitrariedad de los subdelegados de los partidos, y aun de las grandes ciudades, con mengua y menoscabo de la autoridad central, que es de la de donde deben partir, como de su propio centro, todas las disposiciones gubernativas y de administracion, porque con ellas debe entenderse el Gobierno, y sobre ella sola debe pesar toda la responsabilidad. Y este mal era de suyo inevitable, precisamente porque era necesario, como efecto de nuestra viciosa division económica.

Habia provincias de tan grande extension, que no podian ser bien gobernadas por una sola mano, ya porque era imposible atender con el debido celo á un inmenso cúmulo de negocios heterogéneos por los hábitos y costumbres locales, y por sus prerogativas y privilegios; y no menos imposible el que los subdelegados, absteniéndose de decidir en asuntos que no les competian, consultasen y esperasen la decision de la autoridad central. Así fue como la necesidad y la conveniencia de los pueblos introdujo un nuevo orden de cosas, que cambió todo nuestro sistema económico, convirtiendo á las autoridades de las cabezas de partido en otras tantas autoridades supremas, cercenando en gran parte la autoridad de la de toda la provincia. Errores lastimosos, arbitrariedades lamentables, disposiciones absurdas, contradicciones funestas; en fin, un olvido doloroso de las leyes produjo esta innovacion, ó por mejor decir, este abuso, sobre el cual han alzado la voz los pueblos muchas veces, reclamando su remedio, como lo hicieron en el año de 1822 y siguientes. La distancia del centro á la circunferencia era tan larga, que no podian menos de correr los negocios, aun los de pronta resolucion, un círculo vicioso, por donde caminaban con demasiada lentitud y pereza.

Un problema muy debatido en todos tiempos, y que aun no ha podido resolverse satisfactoriamente, llevando el convencimiento á todos los ánimos, es si convendria mas que el Gobierno por sí mismo nombrase los funcionarios públicos de oficial arriba, ó las direcciones de los respectivos ramos, ó los intendentes como autoridades locales. En el conflicto de distintas y encontradas opiniones, se ha visto que los intendentes nombraban personas para ciertos destinos; para otros las direcciones, y el Gobierno para los de un orden superior; y como una reforma de este abuso, ó que se llamó con tal nombre, se ha visto tambien que los Gobiernos que han precedido á este, demasiado celosos de su autoridad y poder, se abrogaron exclusivamente el derecho de nombrar los empleados, aun los de mas menguada categoría, despojando de toda intervencion en esta parte á aquellas autoridades.

El resultado no ha podido ser dudoso. El Gobierno, lejos de las provincias, y sin conocimiento de las personas, no podia caminar con tanta luz como las autoridades locales y las que estaban en estrecha relacion y correspondencia con ellas: los errores eran mas frecuentes: la incapacidad era premiada, y el talento y la virtud postpuestos; sin que pudiese reconvenir, ni menos exigir la responsabilidad á unas autoridades que no habian tenido parte en la eleccion de semejantes manos.